



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI

SENTENCIA No: T-092

PROCESO: ACCION DE TUTELA

RADICACIÓN: 760014003013-2023-00289-00

ACCIONANTE: MARTHA MICOLTA PADILLA

ACCIONADO: ARL AXA COLPATRIA Y SALUD TOTAL EPS.

VINCULADO: COSMITET LTDA, SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS SAS- SOLASERVIS, JUNTA REGIONAL Y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDÉZ Y PORVENIR S.A.

TEMA: DERECHO AL MÍNIMO VITAL

Santiago de Cali, abril veintiocho (28) del año dos mil veintitrés (2023)

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela interpuesta por la Señora MARTHA MICOLTA PADILLA identificada con C.C. 66.983.669, contra ARL AXA COLPATRIA Y SALUD TOTAL EPS., en donde solicita la protección del derecho fundamental al mínimo vital, consagrado en la Constitución Política de Colombia.

FUNDAMENTOS DE LA ACCION:

La accionante manifiesta en su escrito que, fue vinculada mediante contrato de trabajo a término inferior a un año con la entidad COSMITET LTDA, dese el 01 de febrero de 2004 con el fin de desempeñarse como personal de servicios generales.

Informa que posterior al día 02 de abril de 2020, pasó a estar vinculada con la misma entidad por medio de la temporal SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S.A.S. – SOLASERVIS, y que por este motivo cambió de tipo de contrato a obra labor.

Expone que durante el desempeño de sus funciones tuvo un accidente laboral mientras realizaba la limpieza de un baño el día 31 de mayo de 2021, y que a partir de ese momento le generó un cuadro de dolor lumbar crónico, así como politraumatismo en codo izquierdo acompañado de deformidad en las rodillas, con artrosis y con limitación en la marcha.

Indica que la ARL AXA COLPATRIA le expidió el día 13 de agosto de 2021 concepto médico de rehabilitación favorable con recomendaciones médicas laborales por lo que lleva más de un año incapacitada.

Narra que para el día 28 de abril de 2022, la EPS SALUD TOTAL emitió nuevo concepto médico de rehabilitación desfavorable y que posterior a ese momento inició

el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral culminado con cerca de un 12% de PCL.

Menciona que para el día 29 d junio de 2022 mediante correo electrónico le fue notificado la resolución por parte del MINISTERIO DE TRABAJO donde autorizó su despido a la entidad SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S.A.S. – SOLASERVIS, sin que se haya tenido en cuenta su estado de salud y su estabilidad laboral reforzada.

Manifiesta que no le han pagado las incapacidades desde agosto de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023, remitiéndola de un lado para otro a solucionar el problema planteado, ello en atención a que unas incapacidades son de origen laboral y otras, por enfermedad general, circunstancias que han impedido el pago de las incapacidades.

Trascribe diversos apartes jurisprudenciales respecto de la procedencia para el pago de incapacidades, solicitando que se conceda la acción tutelar ordenando el reconocimiento y pago de las incapacidades generadas desde agosto de 2022 hasta marzo del año en curso.

DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO:

El derecho fundamental al mínimo vital, consagrado en la Constitución Política de Colombia.

ACTUACION PROCESAL:

Teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo cumplía los requisitos de los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991, y éste Despacho Judicial es competente para avocar su conocimiento, se dispuso su admisión por Auto interlocutorio No. 1209 proferido el día 14 de abril de 2023 concediendo el término de dos días a las entidades accionadas para que informen sobre los hechos expuestos por la accionante y ejerzan su derecho a la defensa. Igualmente se vinculó al presente trámite a COSMITET LTDA, SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS SAS-SALASSERVIS, JUNTA REGIONAL Y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDÉZ Y PORVENIR S.A., a quienes se les concedió el mismo término para que se pronuncien sobre los hechos que originaron el trámite de amparo constitucional de la referencia.

CONTESTACIONES:

-POR PARTE DE SALUD TOTAL EPS

La EPS accionada indica que se opone a las pretensiones de la presente acción constitucional por no ser la responsable del pago de las prestaciones reclamadas,

toda vez que es el fondo de pensiones quien tiene la obligación de asumirlas por el concepto emitido de rehabilitación integral desfavorable que tiene la accionante. Aduce que se está frente a una falta de legitimación en la causa por pasiva frente a SALUD TOTAL EPS y que no existe vulneración de derechos fundamentales a la accionante.

-POR PARTE DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

El fondo vinculado informa que no hay derecho al pago de incapacidades por parte de la administradora, toda vez que dicha pretensión no se otorga automáticamente, pues se requiere concepto favorable de rehabilitación e incapacidades continuas superiores a 180 días, siendo que para el caso de la accionante, la EPS SALUD TOTAL emitió concepto desfavorable de rehabilitación por lo que, lo procedente para este caso es proteger la estabilidad reforzada de la accionante a través de su empleador mientras se recupera y además, adelantar el proceso de valoración de pérdida de capacidad laboral.

Finalmente solicita al despacho, denegar o declarar improcedente la pretendida acción de tutela respecto de PORVENIR S.A.

-POR PARTE DE ARL COLPATRIA

La entidad accionada manifiesta que el modelo de aseguramiento en salud establecido en la ley 100 de 1993 asignó a las entidades promotoras de salud la responsabilidad del reconocimiento y pago de las incapacidades por enfermedad general a los afiliados cotizantes al régimen contributivo.

Expresa que la norma jurídica indica claramente quienes deben asumir el pago de las incapacidades indicando que:

- Por el periodo de día 1 a 2, la entidad obligada es el EMPLEADOR, según el ART 1 DEL DECRETO 2943 DE 2013.*
- Por el periodo del día 3 A 180, la entidad obligada es la EPS, según ART 41 DE LA LEY 100 DE 1993.*
- Por el periodo del día 181 A 540, la entidad obligada es la FONDO DE PENSIONES, según ART 41 DE LA LEY 100 DE 1993.*
- Por el periodo del día 541 en adelante, la entidad obligada es la EPS, según ART 67 DE LA LEY 1753 DE 2015.*

Manifiesta que en virtud de lo anterior, es claro que la asunción de las incapacidades temporales de origen común se encuentran en cabeza de la entidad promotora de salud (EPS) y de la administradora de fondos de pensiones (AFP) a las que se encuentre afiliada la accionante, toda vez que la patología presentada por la actora, no es de origen laboral, motivo por el cual a la ARL no le corresponde realizar el

reconocimiento de prestaciones económicas solicitadas y más aún, porque la afiliación con la compañía finalizó el día 3 de agosto de 2022.

Finalmente solicita al despacho que declare la improcedencia de la presente acción constitucional, toda vez que no ha vulnerado derechos fundamentales a la accionante.

-POR PARTE DE COSMITET LTDA.

La entidad vinculada solicita la desvinculación de toda responsabilidad dentro de la presente acción, porque la violación de los derechos conculcados no deviene de una acción u omisión atribuible a la entidad dado que, lo que busca la accionante es el pago de acreencias económicas laborales, mismas que no están llamadas a resolverse mediante acción constitucional sino mediante la acción ordinaria competente.

Finaliza su intervención solicitando que se declare la improcedencia de la acción por no haber vulnerado derechos fundamentales al actor.

-POR PARTE de JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDÉZ

La entidad vinculada manifiesta que mediante dictamen No. 66983669 – 2827 del 08/07/2022 dirimió la controversia presentada por la señora MARTHA MICOLTA PADILLA en contra de la calificación de la pérdida de capacidad laboral emitida en primera oportunidad por la administradora de riesgos laborales COLPATRIA, con ocasión del accidente sufrido según FURAT el 31/03/2021, conforme con los hallazgos evidenciados en la historia clínica aportada y bajo criterios legales se calificó contractura muscular LUMBOSACRA, contusión de la región lumbosacra y de la pelvis; contusión del codo izquierdo; origen accidente de trabajo con PCL: 0,00%.

Expone que se notificó a las partes sobre el dictamen y entre ellas a la accionante el día 11/07/2022 a las 16:56 a través del correo electrónico aportado por la calificada para recibir notificaciones y no se presentó recurso alguno, declarándose en firme la decisión.

Finalmente solicita la desvinculación de la presente acción Constitucional, toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales al actor.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, en el que se expresa que las personas cuentan con la acción de tutela como mecanismo para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante trámite preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe en su nombre, su finalidad es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares de acuerdo con la ley, sean vulnerados o amenazados por

la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares. Conjugado lo anterior es competente el despacho de conocer de esta acción, la cual ha sido otorgada a los jueces de la república por la Constitución Nacional.

Por su parte el artículo 48 de la Constitución Política define el derecho a la seguridad social en los siguientes términos:

“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección y coordinación del Estado, en sujeción a los principios de eficacia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrá destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.”

Refiriéndose a este punto la Corte Constitucional en sentencia número T- 163 de Abril 26 de 1996 dispuso lo siguiente:

"Es viable la protección del derecho a la seguridad social a través de tutela, cuando la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, amenace o vulnere su derecho, de tal forma que ponga en peligro otros derechos fundamentales, tales como la vida o la dignidad humana, con mayor razón si se trata de ancianos o niños." (Subrayado fuera de texto).

En este mismo orden, y conjugando los aspectos legales, la doctrina Constitucional ha sostenido que en tratándose de derechos fundamentales, estos pertenecen a la persona humana como tal, es decir como poseedora de una personalidad inimitable caracterizada por su racionalidad la cual le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente, de ahí que se le reconozca la dignidad humana que lo coloca en situaciones de superioridad en el universo social que en el se desenvuelve; por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana, sin los cuales ésta se vería discriminada, enervada y aún suprimida. Son los derechos fundamentales que le protegen la vida, proscriben la tortura, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de culto, de expresión y pensamiento,

salvaguardando su honor. Le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación y a la libertad o escogencia de una profesión u oficio, a la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, etc.”

Dicha posición se robustece en la sentencia T -477 de 2018 cuando el mismo órgano constitucional indicó:

“Esta Corte ha manifestado que el derecho fundamental a la seguridad social hace referencia a los medios de protección que otorga el Estado para amparar a las personas y a sus familias de las contingencias que afectan la capacidad que estos tienen para generar ingresos suficientes a fin de vivir en condiciones dignas y confrontar circunstancias como la enfermedad, la invalidez o la vejez.”

Se manifiesta dentro del presente asunto por parte del accionante una vulneración o amenaza de vulneración al derecho fundamental al mínimo vital y nuestra Carta Política dispone:

ARTICULO 53. *“La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:*

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; (...)”

ANÁLISIS DEL CASO ESPECÍFICO:

De caras a lo expuesto, es claro que los derechos fundamentales nacen con la constitución de 1991 ante la necesidad reinante de proteger a las personas respecto de las cuales se advierta alguna vulneración o amenaza de los mismos, concepto o fundamento que con el paso de los años el órgano de cierre, esto es la Corte Constitucional, ha ido decantando, hasta el punto de establecer un cuerpo de doctrina en particular a efectos de que, se cuente un amplio margen de protección de los mismos para cualquier persona que se sienta afectada, evitando no solo su amenaza o vulneración, sino también la ocurrencia de cualquier acto que los pueda llegar a lesionar.

El problema que surge dentro del análisis que se realiza a los hechos en que se fundamenta la presente acción, tiene que ver con el pago de los dineros correspondientes a unas incapacidades médicas que datan desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023, a nombre de la accionante Señora MARTHA MICOLTA PADILLA (ver folio 14 al 34 archivo 2).

Respecto al caso en concreto, la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el pago de acreencias laborales, pero en sentencia T- 549 de 2006 se plantea lo siguiente:

“Sin embargo, el anterior criterio no es absoluto, toda vez que frente a casos en los cuales la falta de pago tenga como consecuencia la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, la acción constitucional se torna procedente, por cuanto la cancelación requerida puede ser “la única fuente de recursos económicos que permitan sufragar las necesidades básicas, personales y familiares del actor”.

“En virtud de lo precedente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, de manera excepcional, la acción de tutela procede para solicitar el pago de incapacidades laborales. Al respecto, se han esbozado los siguientes criterios:

A. Durante el período de su duración, el pago de la incapacidad sustituye al salario como fuente de ingresos económicos del trabajador: esto implica que gracias a su cancelación no tiene “que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”.

Lo anterior explica que la jurisprudencia de la Corte haya afirmado que se presume “que la incapacidades son la única fuente de ingreso con la que el trabajador cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar, tal como el salario”.

B. El pago de las incapacidades también reviste importancia por su estrecha conexidad con el derecho a la salud, del cual es garantía, por cuanto su cancelación le asegura a una persona la posibilidad de recuperarse siguiendo las indicaciones que le impartan los médicos, sin que se vea en la necesidad de retomar sus labores sin haber cumplido con las prescripciones que le hayan sido dadas.

Este aspecto se relaciona con los principios de igualdad y dignidad humana, según los cuales debe brindarse un tratamiento especial al trabajador que se encuentre en un estado de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud.

C. Dada la vinculación existente entre diversos derechos de rango fundamental y el pago de las incapacidades a favor de los trabajadores, éstos pueden en ciertos casos exigir su pago por medio de la acción de tutela.

Empero, para que lo anterior sea viable, los actores deben reunir una serie de requisitos diseñados por el ordenamiento jurídico colombiano, como por ejemplo, “haber cotizado ininterrumpidamente un mínimo de 4 semanas, si se trata de un trabajador dependiente, o de 24 semanas, en el caso de los

trabajadores independientes, inmediatamente anteriores a la causación del derecho”.

D. En razón de importantes elementos comunes que se presentan entre los casos de falta de pago de incapacidades laborales y falta de pago de la licencia de maternidad, la Corte Constitucional ha manifestado que las líneas jurisprudenciales sobre licencia de maternidad son aplicables a los casos en que un juez de tutela se enfrente a solicitudes de pago de incapacidades.”

*Conforme lo dispone el artículo 2.1.13.4., del **DECRETO 780 DE 2016- INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL.***

“Para el reconocimiento y pago de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general, conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerirá que los afiliados cotizantes hubieren efectuado aportes por un mínimo de cuatro (4) semanas.

No habrá lugar al reconocimiento de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando estas se originen en tratamientos con fines estéticos o se encuentran excluidos del plan de beneficios y sus complicaciones.” (Subrayado fuera de texto)

La ARL accionada ha negado el reconocimiento y pago de las incapacidades solicitadas teniendo como argumento que la actora a la fecha de causación de las mismas no tenía vínculo vigente laboral y que, es responsabilidad del fondo de pensiones asumir dichos pagos, pues la accionante tampoco había efectuado el aporte mínimo de cuatro semanas para su reclamación, lo que no le otorga el derecho para solicitar dicho pago.

Teniendo en cuenta tanto la jurisprudencia transcrita como el análisis del despacho, de una manera desprevenida podría considerarse que el actuar de las accionadas SALUD TOTAL EPS y ARL AXA COLPATRIA resulta violatorio y abusivo frente a la situación de la actora, no obstante, su proceder deviene de la aplicación conforme a lo establecido en el decreto 780 de 2016, que tal como se ha indicado, permite que ante este tipo de solicitud, se rechace su reconocimiento y pago de incapacidades, para el caso puntual aquellas que se encuentran comprendidas entre agosto de 2022 hasta el mes de marzo de 2023, se insiste por no haberse acreditado el pago mínimo de las 4 semanas anterior a la reclamación, tal como se dispone en la norma referida en precedente.

En ese orden, de cara a los ecos de la presente acción constitucional no se aprecia por parte de esta funcionaria judicial, salvo criterio jurídico diferente, una vulneración a los derechos indicados, además de no haberse demostrado la causación de un perjuicio irremediable, ni de acreditarse un grado de diligencia para obtener su derecho, significando igualmente que la actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial de acuerdo a lo dispuesto en el art 6 del decreto 2591 de 1991 por lo

que se torna improcedente la presente acción, pues se requiere adelantar el proceso laboral donde se acrediten las pruebas pertinentes, y se soporte el correspondiente debate probatorio a fin de establecer, en ese escenario la razón de su dicho.

Estas son pues los breves fundamentos para denegar el amparo solicitado, en atención a que no existe certeza dentro del plenario de los pagos efectuados y/o la continuidad en la labor que se realizaba, ello a efectos de entender que pese a la dejación de su empleo se violaron normas laborales que materialicen el perjuicio causado y en su orden la aceptación de esta acción con el propósito de la protección que se alega.

Por las anteriores argumentaciones el JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI VALLE, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: *NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la Señora MARTHA MICOLTA PADILLA contra SALUD TOTAL EPS y ARL AXA COLPATRIA, conforme los motivos expuestos en la parte considerativa de este fallo.*

SEGUNDO: *NOTIFIQUESE esta decisión a los sujetos procesales de conformidad a lo establecido por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Contra el presente proveído, procede el recurso de impugnación dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. Si esta providencia no es impugnada dentro del término de ley, remítase el cuaderno original del expediente a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.*

TERCERO: *IGUALMENTE, una vez se produzca la correspondiente revisión en el portal de la Corte Constitucional, que indique que la misma fue excluida para su revisión, procédase a su archivo en los términos legales.*

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado Por:
Luz Amparo Quiñones
Juez
Juzgado Municipal
Civil 013 Oral
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **97d370fdf3b271b318896cd30bed32d7b24f85e4bc03d9ab5881494085cc0359**

Documento generado en 28/04/2023 03:11:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>